

Rancagua, quince de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en este juicio ordinario laboral de indemnización de perjuicios, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, bajo el RIT O-771-2019, la parte demandante dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada con fecha diecisiete de abril del año en curso, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios deducida por don Sergio Eduardo Vilches Saavedra en contra de Geovita S.A. y de Codelco Chile División El Teniente, sin costas.

Declarado admisible, se procedió a la vista del recurso en la audiencia respectiva, quedando la causa en acuerdo.

Segundo: Que, el recurso de nulidad se basa, en primer lugar, en la causal del artículo 478 letra e), en relación con los artículos 459 N° 4 y 456, todos del Código del Trabajo, denunciando que la sentencia omite el análisis completo y pormenorizado de toda la prueba rendida.

Indica que la sentencia no ponderó la prueba incorporada en virtud de la exhibición de documentos solicitada a la parte demandada, consistente en el informe emanado de la Mutual de Seguridad, de fecha 16 de diciembre del año 2015, rolante a folio 96, titulado “Informe de Evaluación de Sílice Libre Cristalizada y Polvo Fracción Respirable”, en el cual se señala de manera clara que la concentración de sílice libre cristalizada obtenida en los puestos de trabajo evaluados, se encuentran sobre el límite permisible ponderado establecido en el D.S. N° 594, clasificándose en el nivel de riesgo 4, que es aquel que produce un riesgo de generar una enfermedad de índole respiratoria, documento en el que se consignan una serie de recomendaciones ingenieriles y administrativas, documento que pese a su importancia no fue objeto de análisis, más allá de su mera enunciación en el considerando quinto letra b), la que en todo caso se hace en forma equivocada, pues se le individualiza como documento de registro de



mediciones ambientales y personales comprendidas en los periodos del 2014 al 2018, en locación de trabajo denominado Sub 5. Precisa que no hay excusas para que el sentenciador omita el análisis de dicho documento, toda vez que incluso existió una incidencia sobre si la parte demandada había o no entregado digitalizado el mismo.

Señala el recurrente que la sentencia tampoco analiza la prueba pericial rendida por su parte, consistente en el informe de fecha 21 de febrero del año 2020, rolante a folio 84 y en la declaración de la perito psicóloga, doña Ángela Macarena Arias Acuña, quien comparece a la continuación de audiencia de juicio celebrada el día 02 de marzo del año 2020, la que reconoce el informe pericial que emitió, el que además se tiene por reproducido íntegramente en dicha audiencia, por solicitud expresa de las partes a proposición del juez, prueba que permite acreditar un daño psicológico de carácter crónico-severo en el actor, el cual fue causado por la enfermedad profesional padecida por aquel y que versa sobre la silicosis pulmonar diagnosticada, prueba que sólo se menciona en el considerando quinto letra e).

Agrega el recurso que el juez tampoco efectuó análisis alguno de las declaraciones prestadas por los testigos de ambas partes, sino solamente se ha remitido a transcribir lo señalado por los testigos, lo que se evidencia en el considerando quinto y en el considerando undécimo letra h, donde el juez equivocadamente atribuye a los testigos un sentido distinto a lo que dijeron en torno a los elementos de protección personal.

Por otra parte, se afirma que el juez no analiza pormenorizadamente la abundante prueba documental acompañada por su parte, limitándose a transcribirla en el considerando quinto y extractar en forma parcializada, en el considerando décimo tercero, un documento de fecha 7 de agosto de 2014, en el que en una de las hojas de resultados, se señala que la radiografía se encontraría alterada, omitiendo que la hoja N° 2 de resultados, se expresa textualmente: “Radiografía de tórax OIT, sin evidencia de neumonicosis”.



De otro lado, sostiene el recurso que el sentenciador omite valorar la absolución de posiciones solicitada respecto de ambas demandadas, no obstante encontrarse en rebeldía y haberse solicitado el apercibimiento.

Por último, expresa el recurrente que la sentencia contiene una decisión incongruente, por cuanto en el considerando décimo tercero, señala que “tampoco en la demanda se reclama un resarcimiento proporcional a la responsabilidad que le correspondería a Geovita en relación a los restantes empleadores, precisándose su actuar de resguardo o bien las condiciones particulares”, cuestión que es falsa, pues el sentenciador se desliga de los términos del primitivo libelo pretensor, el cual, en su petitorio, confiere facultades discrecionales al tribunal para efectos de proceder a fijar cada daño a indemnizar conforme al mérito del proceso.

Tercero: Que, en segundo lugar, como causal subsidiaria, se invoca la prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, de infracción de ley con influencia en lo dispositivo del fallo, citándose como quebrantados los artículos 1698 del Código Civil y 456 del Código del Trabajo, normas que califica como reguladoras de la prueba, en relación con los artículos 184 del Código del Trabajo, 1547 inciso 3° del Código Civil, 1437 y 1558 del mismo código, 7° y 69 de la Ley 16.744, 57 del Decreto Supremo número 594 y 19N° 1 de la Constitución Política de la República.

Luego de detallar la forma en que se produce la infracción de tales normas, argumenta -en síntesis- que conforme a las disposiciones cuya vulneración se denuncia, se concluye que era Geovita S.A., la que debía probar el cumplimiento del deber de seguridad, mediante prueba documental relevante u otros medios tendientes a ello, cuestión que no hizo en el proceso, no obstante haberse demostrado que los índices de sílice se encontraban altos, de lo cual da cuenta el informe de fecha 16 de diciembre del año 2015, rolante a folio 96, con lo cual se ha infringido el artículo 57 del Decreto Supremo número 594, conforme



al cual: “En el caso en que una medición representativa de las concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente de trabajo o de la exposición a agentes físicos, demuestre que han sido sobrepasados los valores que se establecen como límites permisibles, el empleador deberá iniciar de inmediato las acciones necesarias para controlar el riesgo en su origen”, lo que no fue objeto de probanzas por la demandada Geovita S.A.

Agrega que el incumplimiento del deber de seguridad por parte del empleador, afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los trabajadores, por lo que la liberación de la responsabilidad perseguida con el libelo pretensor respecto de la demandada principal como de la solidaria y/o subsidiaria, conlleva la inaplicabilidad e inobservancia de disposiciones supra legales, como es el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

En conjunto con ello existiría una errónea interpretación del derecho respecto de las obligaciones de hacer de la empresa contratista en materia de subcontratación, toda vez que existe un nulo pronunciamiento por parte del sentenciador respecto de los deberes de retención e información mencionados en los artículos 183 B, 184 D y 184 E, del Código del Trabajo, donde se consagra una clara responsabilidad solidaria o subsidiaria de la empresa mandante, concluyéndose en la especie la responsabilidad de la empresa Codelco Chile, toda vez que al ser la empresa principal se encuentra obligada también al deber de cuidado respecto de enfermedades y accidentes del trabajo, respecto de sus contratistas o subcontratistas.

Cuarto: Que, en subsidio de las causales anteriores, se interpone la prevista en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 456 del mismo código, por cuanto la sentencia infringe en forma manifiesta las reglas de la sana crítica, ya que cuando una enfermedad profesional se manifiesta, en principio hay tan buenas razones para pensar que las causas de dicha enfermedad se



encuentran en las labores desarrolladas en ese momento como en un período previo.

Sostiene que, de esta manera, un análisis judicial correcto, fundado en la sana crítica, no puede descartar que el trabajador haya contraído la enfermedad en otro lugar u empleo y que el estudio causal aparezca como esencial a la hora de imputar responsabilidades.

Señala el recurrente que el juez desatiende que el trabajador en el periodo que va desde el año 2005 al 2017, se encontraba sin presencia de sílices en sus pulmones, según dan cuenta los informes emanados de la Mutual de Seguridad (citados en el motivo quinto del fallo, en los números 2 a 19 y 24 a 28), a lo que se suma que en el documento que el juez refiere en el motivo undécimo, se precisa que la enfermedad se produjo en la última entidad empleadora, siendo equivocado rechazar la demanda por no haberse demandado a todas las entidades empleadoras.

Indica el recurso que se infringen las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, por cuanto el juez asume que la enfermedad debe haberse generado en los periodos laborales trabajados con los empleadores anteriores, sin embargo, olvida que la prueba científica establece que fue en la última empleadora y que los exámenes preocupacionales no detectaron sílice o neumoconiosis al momento en que el trabajador comenzó a prestar servicios para Geovita S.A., lo que el juez sólo descarta en base a que el RX de TORAX habría resultado alterado, omitiendo que el mismo informe donde consta ello, de fecha 7 de agosto de 2014, descarta contraindicación médica para desempeñar el cargo de operador Jumbo, consignándose en la Hoja N° 2 del documento, Radiografía de tórax OIT, sin evidencia de neumoconiosis, lo que impide concluir que tuviese la enfermedad al 2014.

Se infringirían también los principios de no contradicción, de identidad y de razón suficiente, por cuanto la sentencia desestima la responsabilidad de Geovita, a pesar de sostener que su parte rindió



prueba que acredita que el demandante era un trabajador sano al momento de incorporarse a la empresa demandada y de dar por acreditado que el actor estuvo expuesto al sílice durante el tiempo que trabajó para Geovita S.A.

Quinto: Que, con respecto a la primera causal, es del caso recordar que la obligación de analizar toda la prueba rendida se cumple no solo con la reseña y descripción de todo el material probatorio, sino con el examen integral y relacionado de todas las pruebas, debiendo separar y precisar las pruebas que son utilizadas para fundar la decisión, de aquellas que resultan desestimadas, expresando en cada caso las razones que justifican una y otra decisión.

En este sentido, la doctrina precisa que dentro de los casos típicos de fundamentación defectuosa de la sentencia que puede reclamarse al amparo de la causal de la letra e) del artículo 478, se encuentran aquellos en que los jueces no analizan toda la prueba rendida; se limitan a resumir los medios de prueba, sin efectuar un verdadero análisis; derechamente consignan las conclusiones fácticas, sin que ello esté precedido de un razonamiento que permita llegar a ellas; no expresan las razones por las cuales desestiman determinados medios de prueba; acuden al empleo de fórmulas genéricas que nada dicen; no abordan los aspectos contradictorios de la pruebas o declaraciones que se contraponen cuando versan sobre un mismo hecho, entre otras deficiencias. (Astudillo Contreras, Omar. El Recurso de Nulidad Laboral, Algunas Consideraciones Técnicas. Editorial Thomson Reuters, 1º Edición, 2012, pág. 162).

Sexto: Que, en la especie, para analizar la concurrencia de la causal en estudio es del caso precisar que el asunto se traduce en determinar si el sentenciador del grado valoró toda la prueba rendida en el juicio en relación con los hechos centrales en que se funda la demanda, esto es, si la enfermedad profesional que se le diagnosticó al trabajador al término de la relación laboral se originó mientras prestaba servicios para el último empleador.



Séptimo: Que, al respecto, cabe consignar, en primer término, que es un hecho establecido, en virtud del Contrato de Trabajo suscrito con fecha 31 de agosto de 2014 por don José Antonio Carballa Peña en representación de Geovita S.A., en calidad de empleadora, y por don Sergio Eduardo Vilches Saavedra, en calidad de trabajador, que este último se desempeñó para la primera como “operador equipo perforación” en la obra ejecutada en la Mina El Teniente de Codelco Chile denominada “Obras de Preparación de Minas Largo Plazo: Mina Esmeralda Niveles de Hundimiento y Producción”, relativa al contrato N° 4501284193, sujeto a una jornada especial de trabajo distribuida en un sistema de turnos, ingresando a prestar los servicios con fecha uno de agosto de 2014 y concluyendo la relación laboral mediante acuerdo de finiquito de fecha 4 de octubre de 2018, pagándose al trabajador sólo las indemnizaciones por término de contrato, las que fueron calculadas considerando una remuneración mensual de \$1.467.224.

Asimismo, es un hecho establecido en el proceso que mediante Resolución de Incapacidad Permanente Ley N° 16.744 N° 127, emitida con fecha 11 de junio de 2019 por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Sexta Región, se determinó que el demandante padece de silicosis pulmonar, enfermedad o dolencia que le provoca una pérdida de capacidad de ganancia de un 27,5% desde el 13 de diciembre de 2018.

Octavo: Que, la sentencia recurrida razonó, en síntesis, que si bien la Resolución de Incapacidad Permanente concluyó que la enfermedad profesional del demandante se produjo en la última entidad empleadora, en la especie se trata de un trabajador que durante 29 años y 10 meses prestó servicios en la actividad minera expuesto al elemento que provoca la silicosis, esto es, al sílice, tiempo durante el cual sólo prestó servicios para la demandada Geovita S.A., entre septiembre de 2015 (sic) y octubre de 2018, sometiéndose a exámenes de evaluación médica por instrucciones de la misma empleadora, al término de la relación laboral, ya que no presentaba



ningún síntoma de padecer alguna dolencia, constatándose la existencia de un resultado alterado, lo que motivó un estudio más profundo constatándose la existencia de la enfermedad profesional invocada en la demanda, esto es, la silicosis.

Agrega el fallo que la silicosis que afecta al demandante corresponde a una enfermedad progresiva que se ha producido en el caso del demandante por haber desarrollado durante tres décadas una actividad laboral al interior de un yacimiento minero, por lo que si pretende obtener un resarcimiento de los perjuicios que tal enfermedad le provoca, se hace necesario establecer si todos o algunos de los empleadores que ha tenido durante dicha actividad laboral han incumplido con la obligación de cuidado establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, para así determinar el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno de ellos en la generación de la enfermedad, lo que claramente tendrá incidencia en la obligación indemnizatoria derivado de lo anterior, sin embargo, el trabajador en este caso se ha limitado a demandar sólo al último empleador, al que sólo prestó servicios por un periodo determinado de tiempo del total en que estuvo expuesto al riesgo, pretendiendo que sea el único responsable de los perjuicios que la enfermedad le ha provocado, lo que no se puede establecer con la prueba incorporada en el proceso, ya que ni el demandante se explayó en su demanda y tampoco fue objeto de prueba el actuar que tuvieron las demás empleadoras respecto de la obligación de cuidado que se invoca respecto de la demandada.

Concluye que así no es posible determinar la responsabilidad que tendría Geovita S.A. en la generación de la silicosis que afecta al demandante, ya que no se emplazó a los demás empleadores que lo expusieron a la situación de riesgo derivada de su labor o trabajo como minero, y tampoco en la demanda se reclama un resarcimiento proporcional a la responsabilidad que le correspondería a Geovita en relación a los restantes empleadores, precisándose su actuar de resguardo o bien las condiciones particulares de trabajo en relación al



tiempo en que laboró como minero en la mina El Teniente para otros empleadores, circunstancia que imposibilita acoger la demanda en los términos en que ha sido deducida, razonamiento que ha sido aplicado por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de reemplazo pronunciada en recurso de unificación de jurisprudencia en causa Rol 6764-15, en la que expresamente se resolvió que “...para hacer efectiva la responsabilidad para obtener que se resarzan los perjuicios sufridos debe deducirse la acción en contra de todas y cada una que los expuso al susodicho componente.

En este mismo sentido, añade el sentenciador del grado que luego de analizar la prueba en su totalidad, no es posible establecer la mencionada conclusión -en orden a que la enfermedad profesional se habría generado sólo durante el tiempo en que el actor habría prestado servicios para la demandada Geovita-, principalmente porque al revisar los antecedentes remitidos por la Mutual de Seguridad no existe ninguno que permita determinar que la silicosis que afecta al demandante sea de aquella que en la demanda se individualiza como aguda. Si bien es cierto el demandante incorporó una serie de informes de evaluación profesional emitidos por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción para demostrar que era un trabajador sano al momento de incorporarse a trabajar a Geovita, se debe precisar dos antecedentes respectos de dichos informes, el primero es que no en todos ellos se consigna que el demandante haya sido sometido a radiografía de tórax, examen que permitió descubrir la dolencia asintomática que afectaba al trabajador, y el segundo es que a propósito de un requerimiento de evaluación realizado a la misma Mutual el 07 de agosto de 2014, es decir, antes que el demandante ingresara a trabajar para la primera demandada, el organismo previsional informó que al trabajador se le realizó un “RX TORAX AP” el que tuvo como resultado de la evaluación “Alterado”, no obstante lo cual se informó que no presentaba contraindicación médica para desempeñar el cargo de operador Jumbo, desconociendo el motivo



o razón de que el demandante no haya sido sometido a una revisión más profunda o detallada como si lo hizo la Mutual cuando el mismo resultado se obtuvo al realizar el mismo examen una vez terminada la relación laboral.

Por último, en cuanto a la demanda deducida en contra de Codelco Chile División El Teniente, sostiene el fallo que al desestimarse la demanda respecto de la empleadora Geovita S.A. deberá desestimarse también la acción en contra de aquella, dado que conforme al tenor del libelo de demanda, la pretensión indemnizatoria respecto de esta demandada se relaciona con la obligación indemnizatoria que tendría la empleadora, invocándose para ello lo regulado en los artículos 183-A, 183-B y 183-D del Código del Trabajo, normas que establecen una responsabilidad solidaria o subsidiaria, según sea el caso, para la empresa principal o dueña de la obra respecto de las obligaciones de dar que tenga la empresa contratista y empleadora en relación al trabajador, cuando existe un trabajo en régimen de subcontratación, es decir, se hace efectiva una responsabilidad accesorio y no la directa que podría haber tenido la empresa principal en la existencia de la enfermedad profesional conforme a lo dispuesto en el artículo 183-E del Código del Trabajo.

Noveno: Que, para el adecuado análisis de la causal de nulidad en estudio, es preciso señalar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 16.774, para determinar la responsabilidad por los daños causados por una enfermedad profesional, se requiere establecer que ésta última se ha debido a culpa o dolo del empleador.

En el presente caso, el juez del grado descartó la culpa o dolo de la empleadora, por tres órdenes de consideraciones: primero, por estimar que el hecho de que el trabajador haya prestado servicios en la actividad minera expuesto al sílice por casi treinta años para diversos empleadores, trabajando para la demandada sólo los últimos cuatro años, permite presumir que la enfermedad se habría originado con anterioridad al inicio de la última relación laboral, lo que impide



determinar la responsabilidad exclusiva de Geovita S.A. al no haberse demandado a los anteriores empleadores ni pedirse su responsabilidad proporcional; segundo, por considerar que no se acreditó que la silicosis del trabajador fuese aguda, concluyendo, en cambio, que se trata de una enfermedad progresiva; y tercero, porque el trabajador no logró acreditar que al inicio de la relación laboral con Geovita S.A., no padeciera de la señalada enfermedad.

Décimo: Que, en cuanto a la falta de análisis de los exámenes preocupacionales efectuados al trabajador, es posible constatar de la atenta lectura del fallo recurrido y de lo consignado en los párrafos precedentes, que si bien tales medios de prueba se individualizan en los números 2 a 18 de la letra A) del considerando Quinto, efectivamente el sentenciador no efectúa un análisis pormenorizado de los mismos, limitándose a señalar en el considerando decimoquinto, que no en todos ellos se consigna que el demandante haya sido sometido a radiografía de tórax y que en el practicado con fecha 7 de agosto de 2014, antes que el actor ingresara a trabajar para Geovita S.A., se le realizó un “RX TORAX AP”, que tuvo como resultado de la evaluación “Alterado”, sin conocer el motivo o razón de que el demandante no haya sido sometido a una revisión más profunda.

Al respecto, cabe señalar que si bien la obligación de fundamentación de las sentencias no se traduce en una cuestión de cantidad o extensión, sino que de suficiencia y plenitud, lo cierto es que el análisis de los referidos medios probatorios por parte del tribunal no satisface las exigencias mínimas de ponderación de la prueba, por cuanto omiten considerar aspectos relevantes de la misma y cuya estimación resultaba indispensable a la luz de lo discutido en el juicio, evidenciado así un examen sesgado y parcializado de la prueba, que infringe la obligación estipulada en el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo.

En efecto, si bien el juez pondera el documento denominado “Hoja de resultados” de los exámenes preocupacionales practicados al



demandante en la Asociación Chilena de Seguridad, con fecha 8 de agosto 2014, por encargo de Geovita, en cuanto en el acápite “II Resultados” se indica RX TORAX AP “alterado”, nada dice el fallo sobre las conclusiones señaladas en el acápite “III Indicaciones”, donde se expresa: “Radiografía de Torax OIT sin evidencia de neumoconiosis”.

A ello cabe agregar que la sentencia tampoco considera ni analiza el Informe de Evaluación Ocupacional practicado al demandante con fecha 28 de septiembre de 2015, por la Mutual de Seguridad, en el cual se consigna que realizada una Radiografía de Torax AP el 16 de septiembre de 2015, ésta arrojó como resultado normal.

Undécimo: Que, ahora bien, la relevancia de analizar los señalados exámenes preocupacionales y ocupacionales del trabajador al momento de indagar la causalidad e imputar responsabilidades, radica, precisamente, en que con tales estudios se busca detectar patologías preexistentes y evaluar la adecuación del postulante, en función de sus características y antecedentes individuales, para aquellos trabajos en los que estuvieren potencialmente presentes agentes de riesgo como ocurre, por ejemplo, con la exposición al sílice.

De esta forma, si bien una enfermedad profesional no necesariamente se origina en la última empresa en la que el trabajador presta servicios, pues es posible que se contraiga mientras se desempeñaba para un empleador anterior y que sólo se manifieste en forma diferida, lo cierto es que la ignorancia sobre las causas directas de la enfermedad y que puede mantenerse ante sucesivos cambios de trabajo, se rompe con la realización de los exámenes preocupacionales, en cuanto éstos precisamente permiten detectar enfermedades preexistentes.

Duodécimo: Que, por consiguiente, dado que tales estudios o exámenes preocupacionales no fueron debidamente analizados por el juez del grado, no obstante que permitían acreditar que antes del



ingreso a la empresa demandada el demandante no presentaba evidencias de neumoconiosis, lo que incluso se mantuvo hasta el año siguiente, cuando con fecha 16 de septiembre de 2015, se le practicó una nueva Radiografía de Torax AP, cuyo resultado fue normal, sólo cabe concluir que la sentencia impugnada efectivamente incurrió en la causal de nulidad prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 459 N° 4 del mismo código, pues omite analizar toda la prueba rendida en el juicio, vicio que tiene una clara influencia en lo dispositivo del fallo, en cuanto tales medios de prueba permiten descartar el principal reproche que formula el juez de la instancia a la pretensión contenida en la demanda, cual es que la enfermedad profesional presumiblemente se originó en las relaciones laborales previas, máxime si no existen datos objetivos para arribar a dicha conclusión, sino sólo la mera apreciación subjetiva del juez, todo lo cual justifica acoger el presente recurso, siendo innecesario examinar las demás causales invocadas, atendido la relevancia del vicio constatado y el hecho de que estas últimas se dedujeron en forma subsidiaria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 459 N° 4, 478 letra e), 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se acoge el recurso de nulidad** deducido por el demandante en contra de la sentencia dictada con fecha diecisiete de abril del año en curso, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en la causa RIT O-771-2019, la que, en consecuencia, es nula, dictándose a continuación y sin nueva vista, la correspondiente sentencia de reemplazo.

Redacción del ministro Pedro Caro Romero.

Regístrese.

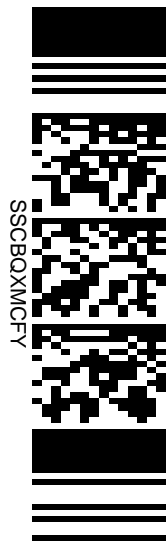
Rol Corte N° 207-20202 Laboral



No firma la abogado integrante Sra. María Latife Anich, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no haber integrado el día de hoy.

Pedro Salvador Jesus Caro Romero
MINISTRO
Fecha: 15/07/2020 18:01:59

Sandra Marcela Jazmin de Orue Rios
MINISTRO
Fecha: 15/07/2020 18:58:39



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Marcela De Orue R. Rancagua, quince de julio de dos mil veinte.

En Rancagua, a quince de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

Rancagua, quince de julio de dos mil veinte.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia anulada, salvo sus considerandos décimo tercero a décimo quinto.

Asimismo, se reproducen los motivos quinto a séptimo y noveno a duodécimo del fallo de nulidad que antecede.

Y se tiene, además, presente:

1º.- Que, la controversia ha quedado circunscrita a determinar si a la demandada principal le asiste responsabilidad por la enfermedad profesional diagnosticada al demandante.

2º.- Que, al respecto, cabe señalar que son hechos acreditados en el proceso, los siguientes:

a) El demandante prestó servicios para la demandada Geovita S.A., en virtud de un contrato de trabajo, desde el uno de agosto de 2014 y hasta el 4 de octubre de 2018, como “operador equipo perforación” en la obra ejecutada en la Mina El Teniente de Codelco Chile, denominada “Obras de Preparación de Minas Largo Plazo: Mina Esmeralda Niveles de Hundimiento y Producción”, relativa al contrato N° 4501284193, sujeto a una jornada especial de trabajo distribuida en un sistema de turnos.

b) Mediante Resolución de Incapacidad Permanente Ley N° 16.744 N° 127, emitida con fecha 11 de junio de 2019 por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Sexta Región, se determinó que el demandante padece de silicosis pulmonar, enfermedad o dolencia que le provoca una pérdida de capacidad de ganancia de un 27,5% y que padece desde el 13 de diciembre de 2018.

3º.- Que, la señalada resolución de incapacidad da cuenta que la enfermedad se originó en la última entidad empleadora, la que corresponde a la demandada principal Geovita S.A., antecedente que no ha podido ser desvirtuado en autos, por cuanto si bien es un hecho



establecido que el actor se desempeñó 29 años y 10 meses en la actividad minera expuesto al sílice, para varios empleadores, no existen evidencias que permitan concluir fehacientemente que la enfermedad se produjo previo al ingreso del trabajador a la empresa demandada.

Al contrario, los exámenes preocupacionales practicados al demandante en la Asociación Chilena de Seguridad, con fecha 8 de agosto 2014, por encargo de Geovita S.A., precisamente a propósito de su ingreso a esta empresa, permite acreditar que a esa fecha no presentaba evidencias de neumoconiosis, pues así se indica en su hoja 2, en el acápite III “Indicaciones”: “Radiografía de Torax OIT sin evidencia de neumoconiosis”, sin que resulte contradictorio lo expresado en el punto II del mismo documento, donde se consigna RX TORAX AP “alterado”, pues a partir de ello no es posible colegir que la enfermedad ya se hubiese manifestado.

4º.- Que, por lo demás, dado que los referidos estudios preocupacionales no sólo buscan evaluar la capacidad laboral sino también la existencia de enfermedades previas, no resulta lícito que Geovita S.A. pretenda exonerarse de su responsabilidad en base a la simple afirmación de que la silicosis debió originarse en las anteriores relaciones laborales, pues si bien no es discutido que en ellas también estuvo expuesto al sílice, es un hecho acreditado que a su ingreso a la empresa no presentaba evidencia alguna de padecer neumoconiosis.

5º.- Que, por otra parte, si bien Geovita S.A. ha sostenido que no le corresponde responsabilidad alguna en la enfermedad profesional, por cuanto habría cumplido con las obligaciones de seguridad que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, cabe recordar que esta norma no sólo exige que el empleador tome todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, sino que requiere que ello resulto eficaz al fin pretendido.

De esta forma, aun cuando se haya acreditado que la empleadora proporcionaba elementos de seguridad al demandante, según formulario firmado por el mismo trabajador, titulado “Solicitud



de Cargos a Bodega”, entre los cuales estaban casco, guantes y zapatos de seguridad, antiparras, chaleco y arnés reflectante, buzo tipo piloto, bota de goma punta acero, tapones auditivos y máscaras con filtros respiratorios, lo cierto es que el trabajador igualmente estuvo expuesto al sílice, agente desencadenante de la enfermedad profesional.

6º.- Que, esta última conclusión se corrobora además con el mérito del documento que rola a folio 96, que corresponde al “Informe de Evaluación de Sílice Libre Cristalizada y Polvo Fracción Respirable”, elaborado por la Mutual de Seguridad, con fecha 16 de diciembre del año 2015, en el que se concluye que la concentración de sílice libre cristalizada obtenida en los puestos de trabajo evaluados, se encuentran sobre el límite permisible ponderado establecido en el D.S. N° 594, clasificándose en el nivel de riesgo 4, existiendo riesgo de generar una enfermedad de índole respiratoria, aun cuando el mismo informe deja constancia que los trabajadores cuentan con protección respiratoria del tipo máscara de medio rostro con filtros de eficiencia 100 %, elemento certificado de acuerdo a lo establecido en el D. N° 18 del MINSAL.

Por consiguiente, el hecho de que la empleadora adoptara medidas de seguridad para evitar el contagio de una enfermedad respiratoria como la silicosis, no impide establecer su responsabilidad por los daños provocados por la patología profesional diagnosticada al actor, por cuanto la palabra *eficazmente* utilizada en el artículo 184 del Código del Trabajo atiende a una especie de obligación estricta, que según algunos, daría cuenta de una obligación de resultado y según otros, basada en la culpa levísima del empleador.

En esta misma línea cabe destacar el Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981, cuando atribuye al empleador deberes de cuidado respecto de los factores de riesgo “que estén bajo su control”, es decir, aquellos riesgos inherentes a su actividad y que desde una perspectiva técnica deba conocer para poder impedirlos.



7º.- Que, conforme a lo razonado, encontrándose acreditado que el demandante mientras trabajó para la demandada principal, estuvo expuesto al riesgo de exposición a material particulado polvo de sílice y que la silicosis se manifestó a los meses después del término de su relación laboral, el 13 de diciembre de 2018, según lo determina la resolución de incapacidad laboral, se concluye que las medidas de seguridad adoptadas por Geovita y de las que da cuenta, entre otros, el informe de verificación de cumplimiento de 6 de agosto de 2016, que rola en el folio 97, no resultaron eficaces para proteger la vida y salud del trabajador en la faena, pues no lograron eliminar el riesgo de aspiración de polvo de sílice libre cristalizada, lo que determina su responsabilidad por los daños que la referida enfermedad le ha causado al demandante.

8º.- Que, por otra parte, el hecho de que los anteriores empleadores de que dan cuenta el historial ocupacional del actor, hayan podido contribuir a la aparición y desarrollo de la enfermedad, no impide determinar la responsabilidad de Geovita S.A., por cuanto se ha acreditado que al ingresar a esta última empresa en el año 2014 no existían evidencias de que presentara la patología y que durante el tiempo que trabajó para ella estuvo expuesto al riesgo, sin perjuicio de que ello pueda considerar al tiempo de regular la eventual reparación económica.

9º.- Que, en cuanto a los perjuicios, se desestimará el lucro cesante, que se hizo consistir en el pérdida de ingresos producto del retiro anticipado de la actividad laboral con motivo de la silicosis, por cuanto la prueba rendida resultó insuficiente para acreditarlo, ya que si bien los testigos presentados dieron cuenta que la enfermedad se le diagnosticó a los 63 años, restándole dos años para jubilar y que no pudo entrar a trabajar a la empresa Aura Ingeniería en la División el Teniente, producto de que se le había detectado silicosis, no se contó con prueba que permita determinar cuánto sería lo que dejó de ganar, a lo que cabe agregar que el lucro cesante debe tratarse de un daño



cierto, efectivo, no meramente potencial, lo que no se cumple en la especie.

10º.- Que, en cuanto al daño moral derivado de la enfermedad profesional, cabe señalar que es el propio artículo 69 de la Ley 16.774 el que dispone expresamente que dentro de los perjuicios que puedan demandarse con motivo de una enfermedad profesional, se incluye el daño moral.

En cuanto a la prueba del daño, la demandante rindió la pericia de la psicóloga Ángela Macarena Arias Acuña, quien señaló que de acuerdo a la sintomatología observada, vinculada al daño derivado de la enfermedad profesional, el demandante presenta un cuadro depresivo-mayor en conjunto con un trastorno adaptativo en torno a la aceptación de su enfermedad y los cambios de vida estructurales que conlleva, con las características ya mencionadas anteriormente. Agrega que presenta daño psicológico de carácter severo-crónico, indicando que las repercusiones psicológicas lo han llevado incluso hasta el punto de percibir una falta de sentido de vida, aclarando que se observa credibilidad clínica en la sintomatología observada.

Además, la perito da cuenta de daño estructural a nivel familiar, teniendo que readecuarse a los roles al interior de la familia, los que han debido sostener el desequilibrio psicológico de don Sergio, generando desgaste, preocupación y estrés psicosocial.

Por último, sostiene la profesional que la situación que lo aqueja inhabilita sus funciones como trabajador, generando incertidumbre extrema respecto a su futuro laboral y respecto de su percepción de autoeficacia, replegándose y reduciendo cada vez más sus actividades en todo ámbito.

11º.- Que, con la prueba pericial rendida, cuyo informe escrito se incorporó al proceso por acuerdo expreso de las partes, según consta en la audiencia de fecha 2 de marzo de 2020, que rola a folio 98, se logró acreditar la efectividad del daño moral que se reclama, por cuanto no cabe duda que el padecimiento de la enfermedad profesional



por parte del actor generó una modificación en sus condiciones y expectativas de vida, provocándole un daño psicológico de carácter severo-crónico, con repercusiones personales y familiares, originadas, por lo demás, en el hecho de verse impedido de continuar trabajando en faenas mineras, atendida la incapacidad permanente establecida.

12º.- Que, para determinar el quantum del daño moral, cuya estimación se hará en forma prudencial, se tendrá en consideración el porcentaje de incapacidad establecido, el hecho de que a pesar de sufrir la patología, el demandante aun no presenta molestias físicas, según consta en los informes médicos detallados en el motivo duodécimo del fallo invalidado, que se tuvo por expresamente reproducido y que la enfermedad se manifestó cuando el actor tenía 63 años de edad, ello además de considerar lo expuesto en el motivo 8º de este fallo.

13º.- Que, por último, en cuanto a la demanda deducida en contra de Codelco Chile División El Teniente, en su calidad de empresa principal o mandante de la obra o faena donde se produjo la enfermedad profesional, aquella se basó en lo dispuesto en el artículo 183 A, B, C, D y E del Código del Trabajo, normas que regulan el trabajo en régimen de subcontratación, solicitándose que se le condene al pago de las indemnizaciones reclamadas en forma solidaria o subsidiaria.

14º.- Que, al respecto, es un hecho establecido que la relación laboral del demandante con Geovita S.A. se realizó bajo un régimen de subcontratación, siendo el mandante Codelco Chile División el Teniente, cumpliéndose además con el requisito de que las labores ejecutadas son propias o habituales de la empresa principal.

15º.- Que, asimismo, cabe recordar que el artículo 183-E del Código del Trabajo establece que, sin perjuicio de las obligaciones que le competen a la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores por aplicación del deber de cuidado que consagra el artículo 184 del referido estatuto, la dueña de la obra debe adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente



la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la Ley N°16.744 y en el artículo 3° del Decreto Supremo N°594, de 1999, del Ministerio de Salud.

Ello significa que a los empleadores que contraten y subcontraten con otros la realización de una faena o servicio propio de su giro les compete el deber de vigilar el cumplimiento de dichos contratistas de la normativa vigente en materia de higiene y seguridad.

De esta manera, tal como lo ha dicho la Excma. Corte Suprema, entre otros, en el Rol 5739-2019, “es evidente que tanto el contratista como la empresa principal están obligados a velar por la protección de la vida y salud de los trabajadores que laboren para el primero en régimen de subcontratación”, pero si se acredita que el accidente del trabajo o enfermedad profesional de un trabajador se debió al incumplimiento del deber de seguridad tanto del empleador o contratista como del dueño de la obra, surgen dos obligaciones con distintos deudores, con la particularidad de que son concurrentes, por lo que si el daño lo repara uno, ese pago exonera al otro. En este último sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema en las causas Rol 7.524-15 y 14.722-18, de 4 de mayo de 2016 y 9 de julio de 2019, respectivamente.

16.- Que, ahora bien, no obstante que Codelco Chile División El Teniente sostuvo que implementó un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores de empresas contratistas, el que consta en el Reglamento Especial para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empresas Contratistas y Subcontratistas, acompañado en autos, según se da cuenta en el motivo séptimo del fallo invalidado, que se tuvo por reproducido, ello no impidió que el actor contrajera la enfermedad profesional de silicosis, por exposición al sílice en las faenas mineras de la División El Teniente, lo que permite concluir que no ha cumplido con la obligación legal de adoptar medidas de seguridad



eficaces para proteger la vida y la salud del trabajador demandante, lo que justifica su condena mancomunada o conjunta con la contratista en la indemnización del daño moral.

17.- Que, el resto de la prueba rendida en autos en nada altera las conclusiones precedentes, por cuanto no tiene la precisión y pertinencia de los elementos técnicos ponderados al efecto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 183 E, 184, 456, 459 y 482 del Código del Trabajo, 69 letra b) de la Ley 16.744, 1547, 1556 y 1698 del Código Civil, **se acoge** la demanda deducida por don Sergio Eduardo Vilches Saavedra en contra de Geovita S.A. y en contra de Codelco Chile División El Teniente, sólo en cuanto se declara lo siguiente:

I.- Que, la demandada Geovita S.A. es responsable de la enfermedad profesional de silicosis sufrida por el actor, debiendo, como consecuencia de ello, pagarle la suma de diecisiete millones quinientos mil pesos (\$17.500.000), a título de indemnización por el daño moral, monto que devengará reajustes según la variación del IPC e intereses corrientes, ambos desde el momento en que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta el día de su pago efectivo.

II.- Que, la demandada Codelco Chile División El Teniente debe responder en forma conjunta del pago de la indemnización por daño moral antes señalada, al haber incumplido al deber de cuidado que le es propio conforme al artículo 183-E del Código del Trabajo.

III.- Que se rechaza la demanda en cuanto a la indemnización por lucro cesante.

IV.- Que, no se condena en costas a las demandadas, por no haber resultado totalmente vencidas.

Regístrese y devuélvase.

Redactada por el ministro Pedro Caro Romero.

Rol N° 207-2020 Laboral



No firma la abogado integrante Sra. María Latife Anich, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no haber integrado el día de hoy.

Pedro Salvador Jesus Caro Romero
MINISTRO
Fecha: 15/07/2020 18:02:01

Sandra Marcela Jazmin de Orue Rios
MINISTRO
Fecha: 15/07/2020 18:58:43



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Marcela De Orue R. Rancagua, quince de julio de dos mil veinte.

En Rancagua, a quince de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

